

EL RINCÓN DE LA ACADEMIA

Repensando la integración y las integraciones. editado por **Eric Tremola Álvarez**, Universidad Externado de Colombia, recoge dieciséis artículos —cinco de estudiosos nacionales y once de académicos extranjeros—, en los que se realizó un profundo análisis en estas materias, y su principal riqueza radica en que se trata de una propuesta colectiva desde diversas perspectivas disciplinarias —política, económica, histórica, jurídica, etcétera— que reflexiona y debate sobre la crisis, los cambios, vicisitudes y nuevas formulaciones de los procesos de integración.

El libro se dividió en cuatro partes: el primer apartado dedicado a las relaciones entre regiones, donde se aborda la presentada entre la Unión Europea con el Mediterráneo, Brasil y el Mercosur, además, en virtud del TLC, la que se ocupa de Colombia con Norteamérica. El segundo: la integración entre latinoamericanos. El tercero: un estudio de la seguridad jurídica en los procesos de integración. Y el cuarto habla sobre la reformulación de la integración y las integraciones, que estudió las particularidades de los procesos latinoamericanos, su futuro, los modelos alternativos y la movilización social de los indignados en Europa.

La Procuraduría: ¿innecesaria o peligrosa?

RODRIGO UPIMNY*



LA VALIDACIÓN POR LA CORTE Constitucional de la sanción disciplinaria contra Piedad Córdoba pone en evidencia el enorme poder que tiene el procurador. Un poder sin controles eficaces, pues ni siquiera la Corte le pone límites claros.

El procurador puede hoy investigar disciplinariamente a cualquier funcionario, con excepción de aquellos pocos que tienen fuero, como el presidente o los magistrados. Y puede destituirlos e incluso matarlos políticamente, pues puede inhabilitarlos para ejercer cualquier cargo por muchísimos años.

El proceso disciplinario es además inquisitivo y con pocas garantías, pues la Procuraduría es juez y parte: investiga, acusa, practica las pruebas, falla y resuelve las apelaciones. Esto es gravísimo pues se trata de una institución jerárquica, en donde todos los funcionarios responden a las instrucciones del gran jefe, que es el procurador general, quien incluso puede asumir directamente cualquier proceso disciplinario.

En Colombia, además, hemos admitido que una falta disciplinaria puede estar descrita muy genéricamente en la ley. No requiere las precisiones y especificaciones de un delito. Por ejemplo, es una falta disciplinaria gravísima, que puede generar destitución e inhabilitación, que el funcionario ejerza sus tareas "con el propósito de defraudar otra norma de carácter imperativo". Y es falta grave, que permite suspender a un funcionario e inhabilitarlo, que éste incurra en retardos en la atención de sus asuntos.

Estas descripciones genéricas otorgan entonces una gran discrecionalidad al procurador para imponer sanciones, quien puede entonces, con un proceso disciplinario con pocas garantías, destituir a cualquier servidor público, incluso a aquellos que fueron elegidos popularmente, como los congresistas o alcaldes, con lo cual desconoce la voluntad de los votantes.

Algunos objetarán que exagero pues la sanción disciplinaria puede ser impugnada ante la justicia, en especial ante la jurisdicción administrativa. Y eso es cierto, pero el problema es que, por la congestión y morosidad de la justicia, esas revisiones judiciales son decididas muchísimos años después, cuando la carrera política o administrativa del funcionario ya ha sido irreversiblemente aniquilada. Y el procurador que impuso la sanción está tranquilo, dedicado a otros oficios.

Hace algunos unos años planteé que la Procuraduría era una entidad redundante, que por economía y simplificación institucional debía ser eliminada, o al menos radicalmente reducida, pues todas sus funciones son cumplidas por otras instituciones, que las pueden desarrollar en forma más especializada y eficiente.

Hoy debo confesar que me equivoqué: las actuaciones de Ordóñez me han convencido de que la Procuraduría no es redundante; en realidad es peligrosa para el Estado de derecho, pues se presta a abusos y puede ser instrumentada políticamente, con investigaciones disciplinarias selectivas. Y es entonces esencialmente por eso que debe ser suprimida.

* Director de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

Editor Domingo: Nelson Frey Padilla Castro.
Jefe de Redacción: Elber Gutiérrez Roa.
Editor Multimedia: Leonardo Rodríguez.
Jefe de Cierre: Ricardo Avila Palacios.
Coordinador Opinión: Andrés Páramo Izquierdo.
Editores:
Arte y Gente: Fernando Araújo V.
Deportes: Olga Lucía Barona.
Internacional: Angélica M. Lagos C.
Investigaciones: Norbey Guevedo H.
Judicial: Juan David Laverde P.

Política: Hugo García S.
Negocios: Edwin Bohórquez Ayra.
Bogotá: Juan Camilo Maldonado.
Vivir: Pablo Correa.
Redacción Comercial: Mariana Suárez.
Redacción:
Política: Felipe Morales, Alfredo Molano y Natalia Herrera.
Arte y Gente: Juan Carlos Piedrahíta, Santiago La Rotta y Juan David Torres.

Deportes: Luis G. Ordóñez, Luis G. Montenegro.
Judicial: Diana Durán, John Alexander Marín C.
Bogotá: Verónica Téllez, Camilo Enrique Segura y Santiago Valenzuela.
Negocios: Jairo Chacón, David Mayorga, y Héctor Sandoval.
Vivir: Carolina Gutiérrez Torres, Angélica Cuevas.
Internacional: Diego Alarcón, Daniel Salgar.
País: Óscar Góesguen.
Redacción Comercial: Sergio Silva, Pilar Cuatras y Jael Mahecha.

Editor Gráfico: Julio César Carrero Ladino.
Diseño: William Niampiara, Andrés Sánchez, Heidy Araya, Carolina Navarro M. y William Botía Suárez.
Infografía: Jonathan Bejarano.
Editor Fotográfico: Nelson Sierra G.
Fotografía: Óscar Pérez, David Campuzano, Luis Ángel S. Gustavo Torrijos y Andrés Torres.

Rasgos y Rasguños

Por Osuna



Sondeo dantesco

Carrusel de contrabando

ALFREDO MOLANO BRAVO



LA FRONTERA DE VENEZUELA CON Colombia está cada día más crispada. No tanto como durante la barbarie de Uribe, aunque lo que él hizo tiene su peso en la actualidad. Todos nos criamos oyendo hablar de los matutes de juguetes, tenis y aparatos que llegaban al país por La Guajira. Nos acostumbramos a oír palabras como guandola, guardia civil, trocha. Quizá también oímos hablar de los miles de camiones cargados —café de la Sierra Nevada, arroz de las vegas del río Zulia, azúcar del Valle del Cauca, cebolla roja de Ocaña— que pasaban la frontera hacia Venezuela. Inclusive se sabía que se arreaba ganado de Arauca y de Meta hacia los llanos del Apure. Venezuela era, como dijo Jorge Zalamea, "rica, riquísima, inmensamente rica". Podía comprar todo, produciendo sólo petróleo. Eran los tiempos de la Venezuela saudita en la que entre adecos y copeyanos se turnaban el poder y se enriquecían sus mandatarios al ritmo en que brotaba petróleo. Una bendición que permitió a los ricos vivir en Miami y al mismo tiempo una maldición que impidió la formación de una

sólida economía campesina. Fueron también los días en que los campesinos colombianos migraban a las costas del lago de Maracaibo, el río Nule, el Táchira. El bolívar era fuerte y el peso, débil. El campesinado que vive hoy en estas regiones fue resultado de la emigración colombiana, sin contar los desplazamientos para allá y para acá vinculados a las guerras civiles del siglo antepasado y el uso de las fronteras como retaguardia de los ejércitos en guerra; refugio de generales, políticos y bandidos de toda condición.

La situación fue cambiando hasta que se volteó del todo. El bolívar se devaluaba en la medida en que el gobierno Chávez invertía en subsidios salariales, vías, vivienda, hospitales, colegios, y en que nuestra guerra lo obligaba a comprar fragatas, aviones, fusiles, cañones. De la corrupción no se puede hablar porque esta ha sido una tradición de Estado. Total, hoy la mano de obra ya no va a trabajar a Venezuela y el contrabando de alimentos y combustibles cambió de dirección: viene de Venezuela a Colombia. ¡Y en volúmenes astronómicos! La cola para pasar de Cúcuta a San Antonio mide kilómetros. Los colombianos cruzamos el puente del Táchira en tropel para ir a comprar alimentos; parecemos nubes de langosta que revolotean, caen y acaban con lo que hay en las tiendas del Estado que, como se sabe, venden a precios subsidiados. Los anaques y depósitos

quedan vacíos, los empleados exhaustos y la gente quejándose por el desabastecimiento. Los precios se trepan a las nubes. No se encuentra la famosa harinapan con que se cocinan las charapas —arepas insustituibles en la dieta—, ni el papel higiénico, tan socorrido y que, dicho de paso, es la única bandera ideológica de la oposición contra Maduro. En ese río revuelto aparecen los astutos mercachifles que venden caro en Colombia lo que compran barato en Venezuela. Un verdadero carrusel.

Lo peor es el contrabando de combustibles. Entra al país por todo camino, carretera o puente; a pie, en bicicleta, en moto, en camión. Una especie de oleoducto a buches. Una cadena de la que viven cientos de pimpineros y con la cual se enriquecen miles de policías y guardias, agentes secretos y altos mandos de allá y de aquí. La razón es simple: cinco galones, el full de un carro normal, cuestan en Colombia 45 dólares, y allá sólo un dólar. Es más cara el agua que la gasolina. La diferencia se explica porque el gobierno bolivariano subsidia el combustible para mantener bajos los precios y nuestro gobierno lo eleva para sostener su economía de guerra. Las colas en las gasolineras de toda la frontera son tan largas como las colas para comprar comida barata en la misma frontera. La gasolina que entra de contrabando a Colombia se lleva al Táchira y al Zulia de contrabando para venderla de donde salió. La vuelta del bobo que enriquece a los vivos.